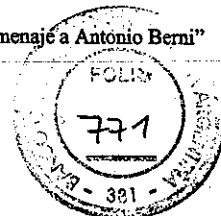




Banco Central de la República Argentina



Expediente N° 105.666/86

RESOLUCION N° 169

Ciudad de Buenos Aires, 29 JUL 2005

VISTO:

El presente sumario en lo financiero N° 708, que tramita en el Expediente N° 105.666/86, instruido por Resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina N° 763 del 10.8.90 (fs. 338/9) a **AGENTRA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.** (como continuadora de **PÉREZ ARTASO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.**) y a diversas personas físicas, en los términos del artículo 41 de la Ley N° 21.526, en el cual obra:

I - El Informe N° 461/490 del 23.4.90 (fs. 328/37), que dio sustento a las siguientes incriminaciones consistentes en:

1) Incumplimiento de disposiciones en materia de política de crédito, en violación a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, artículo 30, inciso e; Comunicaciones "A" 49 OPRAC-1, puntos 1.7 y 3.1; "A" 414 LISOL-1, Capítulo II, puntos 1 y 5 y "A" 467, OPRAC 1-33, punto 1; y a la Nota Múltiple 505 S.A. 5 del 21.1.75.

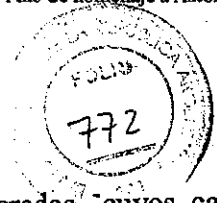
2) Incorrecta registración contable y suministro de información distorsionada al B.C.R.A., en transgresión a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, artículo 36, primer párrafo; a la Circular CONAU-1, B. Manual de Cuentas, códigos 110000 - Disponibilidades- y 131000 -Préstamos. En pesos. Residentes en el país-; y D. Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. Trimestral/Anual, 3. Distribución del crédito por cliente. Normas de procedimiento y a las Comunicaciones "A" 414 LISOL-1, Capítulo VII, punto 4 y "A" 769, REMON 1-266 y cc.

3) Incorrecta integración de la Fórmula 2965 -Estado de los Activos Inmovilizados-, en transgresión a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, artículos 30, inciso d) y 36, primer párrafo y a la Comunicación "A" 414 LISOL-1, Capítulo III y Capítulo VII punto 5.

4) Incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de efectivo mínimo, en transgresión a la Ley 21.526, artículos 31 y 36, primer párrafo y a la Comunicación "A" 10 REMON-1, Capítulo I y cc.

5) Deficiencias que restaban confiabilidad a los registros contables e incorrecta registración del efectivo en caja, en transgresión a la Ley 21.526, artículo 36, primer párrafo, y a la Circular CONAU-1, A. Plan de Cuentas Mínimo, 2. Libros de contabilidad y conservación de la documentación de respaldo y B. Manual de Cuentas, Código 111001 - Efectivo en caja-.

B.C.R.A. 105666 86



-2-

II - La nómina de las personas físicas involucradas, cuyos cargos, períodos de actuación y demás datos personales obran a fs. 326, es: Angel José PINI, Norberto LOPEZ ISNARDI, Mario Enrique SAENZ, Alejandro GONZALEZ, Roberto Antonio PUNTE, Jorge Alberto LOSICER, Roberto Manuel ROMERO y José Héctor FERNANDEZ.

III - Las notificaciones efectuadas, vistas conferidas y descargos presentados, según da cuenta el Informe 465-C/112/91 (fs. 527/31). El auto del 15.10.93 que dispuso la apertura a prueba de las actuaciones (fs. 533/6), las notificaciones cursadas (fs. 537/43 y fs. 683/85), las diligencias producidas y la documentación e información agregada en consecuencia (fs. 544, fs. 546/51, fs. 553/58, fs. 559/85, fs. 586/680, 681/2 y fs. 690/4). El auto ampliatorio de prueba de fs. 695/6, las notificaciones practicadas (fs. 697/700, fs. 712, fs. 716 y fs. 719/20), las diligencias producidas y la documentación e información agregada en dicho período (fs. 709/11, fs. 713/15, fs. 717/18, fs. 721/33, fs. 734, subfs. 1/2, fs. 735, subfs. 1/2, fs. 736, subfs. 1, fs. 737/9 y fs. 741). El auto de fecha 10.8.99 que cerró dicho período probatorio (fs. 742/3) y los alegatos presentados (fs. 754, subfs. 1/9 y fs. 755, subfs. 1/10), y

CONSIDERANDO:

I - Que previo a la determinación de las responsabilidades individuales, corresponde analizar las imputaciones de autos, los elementos probatorios que las avalan, la ubicación temporal de los hechos que las motivan y los argumentos ensayados en las defensas interpuestas por los prevenidos.

1. Se tratan a continuación las imputaciones formuladas en el presente sumario y los principales planteos defensistas .

1.1 - Que el cargo 1 se refiere al "Incumplimiento de disposiciones en materia de política de crédito", encontrándose relatado en el Informe 461/490/90. Se imputa como faceta 1 el apoyo crediticio de los 15 primeros deudores al 30.9.86 el cual representaba el 68,5% de la cartera total de préstamos, mientras que los 50 principales participaban del 98,5% de la misma, entendiéndose que el primer aspecto destacado era indicativo de una concentración de cartera (fs. 328). El Informe 762/063/86 expresa que los 50 principales clientes al 30.9.86 (los cuales representaban el 82% sobre un total de 61 prestatarios), mantenían deudas a esa fecha por un monto de A 715.000 lo que equivalía al 98,5% de la cartera total de préstamos, situación que implicaba que la diversificación de las colocaciones en magnitudes razonables no se adecuaba a las exigencias normativas. Esto permite apreciar una distribución proporcionalmente participativa aunque el análisis de los 15 primeros (25% del total) enturbia estas apreciaciones al informarse que éstos registraban, a la misma fecha, deudas por un total de A 495.000, cifra que representaba -como ya quedó dicho más arriba- el 68,5% del saldo de préstamos (fs. 2/3).

En el descargo interpuesto por el apoderado de los sumariados Mario Enrique Sáenz y Alejandro González, al que adhirieron los co-inculpados Punte, Romero y Fernández (fs. 477, fs. 470 vta. y fs. 475 vta., respectivamente), se consigna que los 50 clientes analizados por la inspección constituían la casi totalidad de los prestatarios porque la entidad financiera era muy pequeña, y que "... 15 clientes es un porcentaje alto con relación al número de clientes que tenía la entidad al 30.9.86. Era el 30% de los clientes que integran el 99% del total de créditos ... porque el 69,2% de los montos adeudados por los 15 principales clientes tenían garantías" (fs. 403 y vta. y fs. 404 vta./5).

[Handwritten signature]

B.C.R.A.

773

1.1.1 - Que el Informe acusatorio 461/490/90 reprocha, como faceta 2 del apartamento 1, luego de la verificación en los legajos de los prestatarios El Cugar S.A., Manuel Ramos Oromí y José Pirillo, la existencia de deficiencias, tales como: carencia y/o desactualización de manifestaciones de bienes o balances; falta de comprobantes de aportes previsionales y de información respecto del destino de los fondos prestados; ausencia y desactualización de información sobre autoridades vigentes de las firmas prestatarias; declaraciones juradas faltantes y/o atrasadas respecto de deudas en el conjunto de entidades financieras del sistema y de la tenencia de activos financieros. Destaca dicho Informe alguna divergencia con respecto a la conducta seguida en el manejo de los acuerdos crediticios concedidos a los señores José Pirillo y Ramos Oromí, y la operación concretada con el señor Pirillo los días 18 y 19.6.86 por A 78.000 y A 65.892 respectivamente, a través del canje de dos cheques de 24 hs., por efectivo, que fueron rechazados por el banco girado.

Pone de relieve la defensa de los señores Sáenz y González, a la que efectúan adhesión los co-prevenidos Punte, Romero y Fernández (fs. 477, fs. 470 vta. y fs. 475 vta., respectivamente), el grado de irrelevancia de los casos imputados pues de un total de 50 carpetas analizadas, sólo 3 de ellas merecieron reparos. Con referencia al cliente El Cugar S.A. manifiesta habersele solicitado repetidas veces la presentación de los balances al 31.12.86 y al 31.12.87, acreditándose ese aserto con la carta fechada 14.4.88 acompañada en copia cuya contestación también se adjunta a las actuaciones (fs. 405 y vta.). Inherente a la carpeta de Ramos Oromí se expresa que este cliente era apoderado de la entidad financiera y que dio un plazo fijo en garantía de su deuda, pormenorizándose que la misma fue totalmente cancelada lo que es demostrativo de la escasa significación de la situación (fs. 405 vta.). La defensa hace alusión a la solvencia del prestatario José Pirillo, de quien también se consigna que tenía depositado un importante paquete accionario de la firma Alpargatas S.A. representativo del 2.254,6% del monto de la suma de los dos cheques canjeados, situación que motivaba el encargo a la ex entidad de gestiones, tales como, la administración y el cobro de los dividendos; las capitalizaciones y la gestión de los certificados de asistencia a las asambleas (fs. 405 vta./6).

En el alegato presentado por el apoderado de los señores Sáenz, González, Punte, Fernández y Romero, se puntualiza que cuando el inspector se refiere a la carencia de balances en los legajos examinados, la ex entidad contestó que "En cuanto balances de empresas estaban pendientes de actualización en cinco casos, de los cuales, 4 no los habían presentado por no estar aún aprobados por las respectivas asambleas, y uno corresponde a una empresa cuyo crédito fue provisionado", añadiendo que se omitió informar cuáles eran los casos faltantes de comprobantes de aportes previsionales o de ausencia de información sobre autoridades vigentes (fs. 754 subfs. 2 vta.).

1.2 - Que el apartamento 2 reza "Incorrecta registración contable y suministro de información distorsionada al B.C.R.A.".

1.2.1 - Que al respecto el informe acusatorio expresa como faceta 1 que la fórmula 3519 "Distribución del crédito por cliente" correspondiente al tercer trimestre de 1986 contenía errores referidos a la titularidad del prestatario, saldos, garantías, código de situación mal informado y deudores no declarados. También se imputa la incorrecta consignación en el renglón "c" de la fórmula -Total de Préstamos más otros Créditos por Intermediación Financiera-, del saldo de la cuenta 141201 -Ajustes e Intereses Devengados a Cobrar- referido a operaciones con este Banco Central, el cual debió informarse en la cuenta 141151 -B.C.R.A. Diversas-, cuenta expresamente excluida del cómputo (fs. 330, fs. 30 y fs. 6, punto 1.4).

G. S. Díaz

B.C.R.A.

774

-4-

La defensa de los señores Sáenz y González, a la cual adhirieron los co-inculpadados Punte, Romero y Fernández (fs. 477, fs. 470 vta. y fs. 475 vta., respectivamente), reitera con relación a la faceta 1 del cargo 2 los conceptos vertidos en la nota obrante a fs. 86 referidos a la escasa significación de los préstamos cuya garantía no se declaró correctamente, informando que todos los deudores con atrasos declarados en situación normal habían cancelado sus deudas con excepción de uno -Sansur S.A.- . Respecto al deudor N° 30 el descargo en análisis informa que la gestión del crédito corrió por cuenta del señor Fernando Raúl Frávega, cuyo titular era su madre, Hilda Nélida Vinelli de Frávega y respecto del cual se otorgó garantía hipotecaria. También destaca que Perfomar y Sideco S.A. eran empresas del grupo Socma S.A. (fs. 408 y vta.). Comentarios de similar tenor formula la defensa del señor Losicer (fs. 517 y vta.).

1.2.2 - Que la faceta 2 de este cargo 2 está relacionada con la asistencia crediticia acordada los días 18 y 19.6.86 al señor José Pirillo, a través del canje de 2 cheques que fueron rechazados por el Banco girado, contabilizándose tal operatoria como dos adelantos transitorios con fecha valor 1.7.86 mediante un asiento de fecha 29.8.86 que se materializó 69 días después de realizada (fs. 4/5, inciso h, fs. 282/6 y fs. 330).

Como consecuencia de ello, se imputa que:

- Los saldos de los rubros Disponibilidades y Préstamos fueron incorrectamente expuestos en la fórmula 3826 (Balance de saldos) al 30.6.86 -cierre de ejercicio- y al 31.7.86, dado que la operatoria crediticia figuró durante ese período integrando el saldo de "Bancos". Al respecto, se destaca que la magnitud del apoyo crediticio representaba el 66,4% de la RPC al 31.7.86 (fs. 330).
- Se omitió consignar a José Pirillo como principal deudor en la fórmula 3519 al 30.6.86 (fs. 331).
- No se declaró el pertinente exceso en las fórmulas 3269 (Fraccionamiento del riesgo crediticio) correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1986 (fs. 331).

Además, se imputan excesos en otros casos de menor cuantía (Frigorífico Rioplatense, Sansur S.A., Bernini y Román Marítima), que no fueron declarados en las fórmulas 3269 correspondientes a junio, julio y agosto de 1986 (ver fs. 331, se dice 1989 a raíz de un error involuntario).

1.2.3 - Que la faceta 3 incrimina que el crédito otorgado al señor Pirillo fue omitido en el cómputo de la fórmula 4026 (operaciones a tasa no regulada) durante los meses de junio a agosto de 1986; dicha fórmula presentaba, además, diferencias, por haberse computado saldos de préstamos por importes menores al que correspondía (fs. 331).

1.2.4 - Que el descargo de los señores Sáenz y González, al que efectúan adhesión los co-sumariados Punte, Romero y Fernández (fs. 477, fs. 470 vta. y fs. 475 vta., respectivamente), se remite con relación a la faceta 2 "... a lo informado al contestar el cargo 1 a 2", pues interpreta que "... al no tenerse conocimiento del rechazo de los cheques no podía informarse en las comunicaciones al BCRA sobre la existencia del crédito instrumentado como

B.C.R.A.

775

consecuencia de tal rechazo. Las diferencias motivadas por otros clientes son insignificantes. En efecto los cargos determinados en el anexo III (Fs. 5) totalizan A 9.658,58.- Excluyendo a J. Pirillo totalizarían sólo A 496,93.-, este importe representa sólo el 5,1% del total determinado" (fs. 408 vta./9). La defensa en análisis expresa con relación a la faceta 3 que los cargos estimados por la inspección corresponden en casi su totalidad al crédito instrumentado con motivo de los rechazos de los cheques del señor José Pirillo, presentándose los formularios 3030 y las rectificativas por los meses de junio, julio, agosto y setiembre de 1986; respecto a lo expresado a fs. 331 punto 4 se remite a lo informado sobre las facetas 1 a 3 (fs. 409). El descargo deducido por el apoderado del señor Losicer formula apreciaciones similares a las comentadas (fs. 517 vta./8).

1.3 - Que el ilícito 3 consiste en la incorrecta confección de la fórmula 2965 "Estado de los Activos Inmovilizados".

El Informe acusatorio destaca que la inspección detectó distintas deficiencias en la integración de la fórmula imputada que provocaban una modificación de los márgenes favorables originalmente declarados por la ex entidad, los que se transformaron para los meses de julio y agosto de 1986 en excesos, generando cargos a abonar (fs. 332).

Las incorrecciones se debieron a lo siguiente:

- Mantuvieron activado en la cuenta (141151) "B.C.R.A. -Diversos-" al 30.9.86 un importe de A 14.489 correspondiente al extravío de v/N 12.000 Bonos Externos de la República Argentina, que fueron excluidos de toda consideración para el cómputo de la relación.
- No computaron Bonos Externos, Serie/82, que estaban dados en garantía a la Comisión Nacional de Valores para poder actuar como agente extrabursátil, los cuales fueron reemplazados durante septiembre por una garantía bancaria.

Tales aspectos fueron observados por esta Institución en el memorando de conclusiones, no aceptando la ex entidad, en su respuesta, con relación al primer ítem, el criterio de la inspección referido a la imputación a resultados del importe de los Bonex extraviados que implicaba disminuir su responsabilidad patrimonial computable, aunque sí entendió que los Bonex encuadraban en el concepto de activos inmovilizados a tenor de lo expresado a fs. 88 (fs. 50, punto IV, detalle en anexo de fs. 59 y fs. 332).

La acusación entendió por ello que, de aceptarse tal criterio, debería adicionarse el importe de los Bonex a los demás activos inmovilizados, en lugar de deducirse dicho monto de la R.P.C., con lo cual igualmente resultaba correcta la determinación de excesos y cargos realizada por la inspección a fs. 59 (fs. 332).

No obstante lo expuesto, la ex entidad manifestó en su respuesta de fs. 88 que iba a proceder a rectificar las fórmulas pertinentes, aceptando las incorrecciones antedichas (fs. 332).

La defensa de los señores Sáenz y González, a la cual adhieren los co inculpados Punte, Romero y Fernández (fs. 477, fs. 470 vta. y fs. 475 vta., respectivamente), informa que la entidad después de 4 años cobró los dividendos y las amortizaciones de los Bonex extraviados y obtuvo los duplicados, situación que interpreta como confirmatoria del criterio sostenido por la

B.C.R.A.

776

ex entidad de no imputar el valor de los Bonex a resultados (fs. 408 y vta.). Planteos de parecido tenor formula la defensa del señor Losicer a fs. 518 y vta.

1.4 - Que la irregularidad 4 concierne al "Incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de efectivo mínimo".

Tras la verificación del efectivo mínimo (Fórmula 3000 y conexas) surgieron diferencias en partidas correspondientes a su integración, las cuales revertían las posiciones favorables declaradas por la entidad, convirtiéndose en defectos para los meses de abril, junio, julio, septiembre y octubre de 1986 (fs. 333).

Las deficiencias obedecían a las siguientes causas, según surge de las determinaciones de fs. 62/4:

- Los cheques de los bancos comerciales eran restados del saldo de integración desde la fecha de su emisión hasta la de su efectivo débito, cuando correspondía su inclusión como partida sujeta a exigencia de efectivo mínimo, según lo establece la Comunicación "A" 10, REMON 1, punto 1.1.9., Capítulo I y Renglón 1.2. del Anexo al mismo Capítulo, punto 2).
- Existían diferencias entre las cifras volcadas en los papeles de trabajo y las que surgían de los respectivos mayores.
- Fueron tomados por importes superiores a los que correspondía los saldos provenientes de la "Liberación Condicionada del Depósito Indisponible", conforme surgió de las fórmulas 4084 rectificadas que fueron presentadas a esta Institución, a raíz de errores señalados por la Gerencia de Control de Entidades Financieras de este Banco Central.

Estas observaciones fueron aceptadas con reservas por la ex entidad, de acuerdo a lo que se desprende de la nota obrante a fs. 91, remitiendo las fórmulas 3000 rectificadas según consta a fs. 109, punto VII, fs. 150/75 y fs. 334, con el ingreso de los cargos respectivos.

Los señores Sáenz y González en la defensa interpuesta, a la que adhieren los co-prevenidos Punte, Romero y Fernández (fs. 477, fs. 470 vta. y fs. 475 vta., respectivamente), efectúan una reiteración de lo informado en la nota de fs. 91 en el sentido de que se trata de un problema formal que no incide en el cómputo del efectivo mínimo (fs. 408 vta./9). También hacen notar lo insignificante de las diferencias determinadas por la inspección, salvo las diferencias entre la entidad y esta Institución con relación al importe diferido del depósito indisponible y las partidas pendientes de liquidación con el BCRA (fs. 408 vta./9). Argumentaciones similares plantea la defensa del señor Losicer a fs. 518 vta.

1.5 - Que el cargo 5 alude a "Deficiencias que restaban confiabilidad a los registros contables y a la incorrecta registración del efectivo en caja". La inspección actuante realizó el 13.10.86 un arqueo de efectivo existente en caja y tesoro, el cual arrojó un faltante de A 446.788,17 (fs. 12/3, fs. 300/1 y fs. 334). La entidad justificó la diferencia alegando la existencia de 3 movimientos realizados a última hora, según surge del acta labrada al cajero y al presidente obrante a fs. 307, estimando la inspección actuante que las explicaciones no resultaban satisfactorias a los efectos de justificar la diferencia existente al momento del arqueo,

[Handwritten signature]

B.C.R.A.

777

toda vez que los comprobantes recién fueron presentados después de las 20 horas o al día siguiente (fs. 201, fs. 307/8 y fs. 334). Expresa el Informe 461/490/90 que se detectó en el arqueo del 13.10.86 la existencia de vales de caja por A 585 que eran incorrectamente registrados como efectivo. Por su parte, el Libro de Tesoro presentaba -en las fechas indicadas- saldos borrados y luego sobrescritos, observándose también en general diversas tachaduras y enmiendas (fs. 13, fs. 53 "in fine", fs. 54, punto 3, fs. 308 "in fine" y fs. 335). Una nueva comisión de este Banco Central volvió a realizar otro arqueo el 24.4.87 durante el cual continuó observándose la existencia de vales de caja que fueron considerados como efectivo. Los vales existentes en esas condiciones alcanzaron la suma de A 1.423, luciendo a fs. 72 y 74/5 el acta labrada en oportunidad del arqueo y las copias correspondientes (fs. 335).

La defensa de los señores Sáenz y González a la que adhirieron los señores Punte, Romero y Fernández (fs. 477, fs. 470 vta. y fs. 475 vta., respectivamente), expresa que las entidades financieras pequeñas, como Pérez Artaso en 1986, para poder competir con los bancos grandes, debían prestar un mejor servicio a sus clientes, mencionando que en cumplimiento de ese objetivo fue que la compañía financiera envió el dinero al domicilio del cliente Luis Korman (fs. 410). Entiende ilógica la manifestación del inspector de resultarle extraño que se le haya enviado el dinero a un depositante que hacía sólo 5 días que operaba, dado que cualquier inversor de una entidad financiera mejora su atención "... cuando es un cliente nuevo que cuando resulta un cliente habitual" (fs. 410). El descargo en análisis manifiesta con relación a la compra de Bonex 82 que el 13.10.86 le fue exhibida al inspector la planilla con la numeración de los mismos, así como las láminas pertinentes y, al día siguiente, el boleto por la compra efectuada a Mercado Abierto S.A. Respecto a esto último explica que la diferencia entre los comprobantes internos de la entidad y los definitivos carece de toda significación y, particularmente, obedece a que los comprobantes internos se integraron en base a cifras estimadas, presentando diferencias irrelevantes. También consigna la circunstancia de que la inspección ignoraba el hecho de que la ex compañía financiera había realizado tales operaciones como agente de Mercado Abierto (fs. 410 y vta.). Con referencia a los vales existentes al practicarse el arqueo de fecha 24.4.87 por un total de A 1.423, expresa la defensa que corresponden a entregas hechas a personal de cafetería. En lo atinente al libro de Tesoro aduce no tratarse de un libro obligatorio y, por ende, de cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Comercio (fs. 411). Similares apreciaciones formula la defensa del señor Losicer a fs. 518 vta./20.

En el alegato deducido por los señores Sáenz, González, Punte, Fernández y Romero se contradice lo expresado por la acusación con relación a que las pruebas acreditantes de la diferencia existente al momento del arqueo fueron presentadas después de las 20 horas, dado que en el acta de arqueo obrante a fs. 307/8 se había dejado constancia de que los títulos fueron exhibidos a las 18,45 hs., destacando asimismo que la diligencia comenzó a las 18,30 hs. y en la medida en que los comprobantes se iban solicitando éstos eran entregados (fs. 754, subfs. 6). Dicho escrito también hace alusión a la contestación de la sociedad Mercado Abierto S.A. con relación a que procedió a comprar el 13.10.86, "... mediante boleto N° 8294, por cuenta y orden de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A., la cantidad de V.N. 15.000 Bonos Externos de la República Argentina, Serie 1982, con Cupón 10 adherido, a un precio de A 7,480 cada uno, por un importe total de A 112.200 ..." (fs. 754, subfs. 6).

II - Que ahora se pasarán a analizar los cargos formulados.

1 - Que con relación a la faceta 1 del ilícito 1, el cúmulo de antecedentes permiten expresar que la verdadera gravedad de los hechos reprochados no se encuentra nítidamente

B.C.R.A.

778

demostrada, generándose un cuadro de duda en torno a la convalidación de la valoración efectuada por los funcionarios de esta Institución que impide el mantenimiento de esta faceta de la imputación formulada. Los argumentos vertidos por los señores Sáenz y González, con relación a la faceta 2 del cargo 1, en lo que hace al exiguo número de casos registrados resultan aceptables, pues aún cuando la norma imputada no establece cantidades o proporciones sobre la base de las cuales se produciría o no un apartamiento a sus preceptos, no puede negarse que los pocos casos verificados en la universalidad de deudores del ex banco quitan relevancia a los hechos imputados. Además, las alusiones de la defensa de los señores Sáenz y González con respecto tanto al pedido de los balances al 31.12.86 y al 31.12.87 a la firma El Cugar S.A., cuanto a la garantía que amparaba el crédito del cliente Ramos Oromí, debilitan la imputación relativa a la política discrecional llegándose a determinar que se trata de tan solo operaciones aisladas que no definen un manejo crediticio orientado a sostener un apartamiento normativo como sistema de comportamiento.

1.1 - Que concluyendo, los argumentos defensivos logran excusar el accionar de los sumariados, ameritando esa situación el no mantenimiento del reproche formulado.

2 - Que en cuanto a la faceta 1 del apartamiento 2, es menester tener en cuenta que la incorrecta información sobre la real posición de 13 deudores que fueron declarados en situación normal, lo que generó discrepancias entre lo informado por la entidad y las verificaciones de la inspección con respecto a 3 de ellos en virtud de atrasos registrados y con relación a 6 prestatarios en razón de las garantías de las acreencias, carece de total trascendencia atento la nula incidencia patrimonial que tuvo esa única distorsión informativa.

Las explicaciones de las defensas en análisis con respecto a la faceta 2 del apartamiento 2, en lo que hace al desconocimiento de los rechazos de los cheques del cliente José Pirillo y del crédito instrumentado a raíz de los mentados rechazos, no resisten el menor análisis. Ello así dado que la contabilización de los dos adelantos transitorios concedidos al cliente Pirillo -a tasa no regulada- por un total de A 150.443,88 (capital más intereses), a los 69 días de haberse producido los rechazos de los cheques de fechas 18 y 19.6.86 (ver fs. 98), obedeció al intento de regularizar la situación creada hasta entonces, mediante la cual la operación mencionada no se hacía aparecer en los balances de saldos -fórmulas 3826- presentados por la entidad financiera, correspondientes a los meses de junio y julio de 1986.

Es decir que dicha operatoria significó que no se rebajó el saldo de Disponibilidades en Bancos de las fórmulas 3826 imputadas, ni tampoco se contabilizó el comentado crédito en el momento correcto, destacando el Informe 764/177/88 que la tardía contabilización de la operatoria con el cliente Pirillo, cuyo monto representaba el 66,4% de la RPC de la entidad, tuvo serias implicancias, dado que no fue considerado en la integración de las fórmulas 4026 (Operaciones a Tasa no Regulada) y 3269 (Fraccionamiento del Riesgo Crediticio), las que tuvieron que ser modificadas y generaron cargos a pagar (ver fs. 58, fs. 61 y fs. 98).

El planteo de las defensas inherente al cargo 2 -faceta 2-, relativo a las rectificaciones de las informaciones 3269 correspondientes al período junio/agosto de 1986 y a la determinación de cargos, prioritariamente, por el crédito concedido al señor Pirillo, si bien condice con el detalle del Anexo III (fs. 58) carece de virtualidad exculpatoria, atento a que tanto la argüida normalización como la estimación y el pago de los cargos correspondientes no confiere legalidad a los acontecimientos imputados.

B.C.R.A.

779

2.1 - Que, consecuentemente, teniendo en cuenta los elementos acreditantes de los hechos infraccionales y las defensas articuladas por algunos prevenidos que no desvirtúan cada una de las evidencias conformantes de las facetas 2 y 3 de la presente incriminación 2, cabe tener por comprobados los hechos que la configuran durante el período junio/septiembre de 1986, no manteniéndose la imputación con relación a la faceta 1 del cargo 2.

3 - Que en atención al planteo de las defensas con referencia al cargo 3 cabe examinar los antecedentes del hecho relativo al extravío de los Bonos Externos.

Al respecto, se especifica en el Memorando de conclusiones al 30.9.86 que el importe de A 14.489 declarado en la cuenta 141151 "B.C.R.A. - Diversos" correspondiente al extravío de V.N. 12.000 Bonos Externos de la República Argentina, no fue correctamente considerado dentro de la relación del estado de los activos inmovilizados por tratarse de un gasto a recuperar de dudosa cobrabilidad (fs. 50/1). En razón de ello, la inspección actuante consideró que el hecho comentado debía ser castigado contra resultados desde el momento que se produjo, mediante la afectación proporcional de los meses en los que se generaron devengamientos (fs. 50/1, punto IV); se glosa a fs. 59 el detalle de la incidencia de estos conceptos y los excesos detectados.

El Informe 762/063/86 da cuenta de que ello imponía actuar con un criterio de prudencia, pues constituía un gasto a recuperar que debía ser castigado contra resultados con el objeto de modificar así los saldos de RPC declarados que produjeron excesos. También se consigna que se generaron cargos al 30.9.86 por un monto actualizado de A 1.160 (fs. 9 y fs. 37).

Como resultado de todo lo expuesto, de manera nítida surge la falaz interpretación efectuada por las defensas examinadas, toda vez que la efectiva percepción por parte de la ex entidad de los dividendos y las amortizaciones de los Bonex extraviados luego de 4 años, en modo alguno acredita la corrección de la tesitura adoptada, en su oportunidad, por la ex compañía financiera. Ello así por cuanto dicho plazo es el estipulado por el artículo 755 del Código de Comercio para la entrega de las láminas duplicadas en reemplazo de las extraviadas, pero dicha circunstancia de ninguna manera implica que haya existido acatamiento a la normativa vigente en el tratamiento seguido por la ex entidad.

3.1 - Que, consecuentemente, teniendo en cuenta los elementos acreditantes de los hechos infraccionales y las defensas articuladas por algunos prevenidos que no desvirtúan cada una de las evidencias conformantes de la presente incriminación 3, cabe tener por comprobados los hechos que la configuran durante el período junio/septiembre de 1986.

4 - Que con relación al cargo 4 la interpretación de las defensas examinadas no hace más que insistir en la tesitura expuesta en la nota de fecha 12.2.87, en el sentido de que los hechos imputados obedecieron al no compartido criterio que asumió la ex entidad y que los mismos no afectaron el cómputo del efectivo mínimo (ver fs. 91). Sin embargo, los argumentos ensayados por las defensas analizadas no admiten exculpación, dado que las deficiencias señaladas denotan errores de cálculo y de exposición.

En ese sentido, el Informe 762/063/86 indica, entre las partidas mal expuestas, al saldo no debitado del depósito indisponible Comunicación "A" 617 y los cheques de bancos comerciales, los cuales eran restados del saldo de integración desde la fecha de emisión hasta la

B.C.R.A.

780

de su efectivo débito, cuando correspondía su inclusión como partidas sujetas a exigencia (ver fs. 7).

Consigna el aludido Informe que las restantes diferencias se refieren a que la entidad financiera no dedujo oportunamente las cuotas del préstamo consolidado del "Depósito Indisponible" y, consecuentemente, se devengaron intereses sobre saldos ligeramente superiores, los que a través del tiempo produjeron un efecto multiplicador, generándose diferencias que totalizaban al 30.9.86 la suma de A 29.098, las que debieron imputarse a resultados (fs. 7). También refiere el Informe en análisis que los saldos provenientes de la "Liberación Condicionada del Depósito Indisponible" inciden en forma directa en la fórmula 3000 (Estado de Efectivo Mínimo), ya que afectaban las partidas de integración (fs. 7). A fs. 35/8 se encuentran agregados unos cuadros que ilustran sobre los cargos resultantes en virtud de las deficiencias señaladas, los que debidamente actualizados al 30.9.86 ascienden a A 17.734.

4.1 - Que, consecuentemente, teniendo en cuenta los elementos acreditantes de los hechos infraccionales y las defensas articuladas por algunos prevenidos que no desvirtúan cada una de las evidencias conformantes de la presente incriminación 4, cabe tener por comprobados los hechos que la configuran durante el período abril/octubre de 1986.

5 - Que la documentación sustentatoria del cargo 5 permite observar que el presidente de la entidad admitió estar en conocimiento de toda la operatoria "agregando que se llevaron los fondos al domicilio de cada uno, donde contra entrega del dinero obtuvieron los títulos y el comprobante de retiro de caja de ahorros según el siguiente detalle": (fs. 300/1) retiro de A 164.000 de la caja de ahorros N° 2815/0/01 del señor Luis A. Korman; compra de acciones de Alpargatas S.A. a José Pirillo por un total de A 170.500; compra de Bonex serie 82 a la firma Mercado Abierto S.A. por A 112.500 (fs. 12). Los envíos se efectuaron -en todos los casos- para efectuar la liquidación de las operaciones -fuera del horario de atención- a los domicilios de los clientes, destacando la inspección que "... los tres comprobantes respaldatorios fueron entregados a la comisión fuera del horario del arqueo" (fs. 12 y fs. 307). La inspección preguntó la razón por la cual los instrumentos obrantes a fs. 309/11, confeccionados por la ex entidad, no se hallaban intervenidos con el sello de caja, a lo cual el presidente de la misma respondió: "Al momento del arqueo los aludidos comprobantes se hallaban en viaje a la entidad motivo por el cual los comprobantes fueron acompañados a posteriori del arqueo y consecuentemente no fueron intervenidos con el sello de caja; no obstante los mismos serán incorporados al movimiento diario de caja del día 13.10.86 y consecuentemente intervenidos" (fs. 308).

La ex compañía financiera hizo entrega a la inspección actuante de una orden de pago de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A. (formulario N° 60873) para la compra de 155.000 acciones de Alpargatas S.A. para cartera propia, por valor total de A 170.500, cuyo beneficiario era José Pirillo y un recibo emitido por éste por la venta de 154.000 acciones de la mencionada firma Alpargatas S.A. (fs. 312/3), surgiendo diferencias entre esos documentos con los emitidos con posterioridad por la ex compañía financiera en lo que respecta a los precios de adquisición y la cantidad de acciones negociadas (fs. 317/8), de resultas de lo cual se comprobó la existencia de un pago efectuado de menos en A 75,02 imputado contra la cuenta Acreedores Varios (fs. 301/2 y fs. 307/8).

También cabe puntualizar que el presidente de la compañía financiera informó a la inspección actuante al día siguiente del arqueo de caja que las acciones de Alpargatas S.A. habían sido vendidas el mismo día del arqueo -13.10.86- a la firma Tintitaco S.A., a término (72

B.C.F.A.

781

horas), a propuesta del propio señor Pirillo, quien había acercado también al comprador de las acciones, emitiendo la compañía financiera, también con posterioridad al 13.10.86 en que se efectuó el arqueo de caja, un boleto de venta fechado 13.10.86 en el cual quedaba consignado que la operación fue realizada por cuenta y orden del señor Pirillo (fs. 318), no compadeciéndose esto con el comprobante contable -N° 60873- presentado a la inspección durante el arqueo en el que aparecía con toda claridad que la adquisición se efectuaba para "cartera propia" (ver fs. 301/2 y fs. 312).

Esta situación fue interpretada en el sentido de que la operación planteada en su origen por el presidente de la ex compañía financiera debió ser modificada con posterioridad, al no resultar viable la tipificación contable asignada inicialmente a la operatoria de la compra de acciones al señor Pirillo, por cuanto éste no estaba autorizado para operar como agente extrabursátil (fs. 302 y fs. 18), dejándose expresado en el acta labrada el 13.10.86 -fs. 307/8- que durante la realización del arqueo, y con relación a la compra de Bonex 82 a la firma Mercado Abierto S.A., la compañía financiera aportó un comprobante interno integrado por ella que carecía del respectivo sello de caja (fs. 310) y otro que contenía el detalle de numeración de las láminas (fs. 311). Al verificarse al día siguiente el aludido comprobante interno la inspección actuante constató que el mismo se hallaba intervenido con el sello de caja pero el importe difería en A 300 (ver fs. 315) con el boleto de compra de la firma Mercado Abierto S. A. (fs. 316), el cual no contenía el número de operación y fue incorporado con posterioridad a la realización del acta. Pormenoriza el Parte N° 1 que el cómputo de la caja -merced a los aludidos comprobantes y a los vales existentes- arrojó un sobrante de A 733,17 que no fue localizado y que resulta difícil atribuir a las operaciones realizadas el 13.10.86, por cuanto éstas fueron escasas, según surge de la planilla de caja de ese día (fs. 302).

5.1 - Que pasando ahora a analizar los argumentos particulares, corresponde detenerse en el examen que se fundamenta del siguiente modo. Las defensas analizan discutibles manifestaciones formuladas por el inspector con respecto a la imputación 5, referidas al envío de dinero a un inversor de reciente data, para tratar de justificar el resultado del arqueo del día 13.10.86 que dio un significativo faltante de efectivo de A 446.788,17, cifra que representaba el 156% de la RPC de la entidad financiera al 30.9.86, sin que existiera fehaciente documentación de respaldo. Las explicaciones brindadas por las defensas analizadas, en torno a que las diferencias -en el caso de las compras de Bonex 82- entre los importes arrojados por los comprobantes externos y los confeccionados por la propia entidad reposan en que estos últimos fueron confeccionados en base a cifras estimadas, no resultan convincentes dado que aún en este caso subsiste la circunstancia de que la salida de fondos se hizo efectiva sin la intervención de caja, es decir, que tampoco esta operación presentaba la evidencia de su debida instrumentación. No puede válidamente la defensa interpretar como absurda la consideración formulada por la inspección cuando relaciona las operaciones relativas a la compra de acciones de Alpargatas S.A. y Bonex 82 que presuntamente se concertaron el día del arqueo -13.10.86- por valor de A 283.000, las cuales representaban el 99% de la RPC de la compañía financiera al 30.9.86, por cuanto dicha observación no permite más que vislumbrar el desproporcionado faltante de efectivo imputado.

La norma transgredida establece que se deben incluir en el Capítulo Activo del rubro Disponibilidades: "los billetes y monedas en pesos, en cajas de la entidad financiera radicadas en el país. También se registrarán los fondos asignados con destino a gastos menores sujetos a periódica rendición de cuentas, siempre que estén totalmente repuestos al fin de cada período mensual". Las defensas silencian el hecho de suma importancia en el esclarecimiento de

B.C.P.A.

782

los hechos investigados que se relaciona con la circunstancia relativa al envío de fondos en efectivo por valor de A 164.000 al señor Luis A. Korman (titular de la caja de ahorros N° 2815/0/01), fuera del horario de atención al público y el riesgo que ello implicaba, por cuanto esa salida de fondos era notablemente superior a la que cubrían los seguros en vigencia por dinero en tránsito, dado que la compañía financiera sólo contaba con cobertura por A 35.000.

En cuanto al planteo de las defensas respecto a que el Libro de Tesoro no era obligatorio y, por tanto, estaba eximido de cumplir con lo establecido en el artículo 54 del Código de Comercio, cabe tener en cuenta que la norma reglamentaria infringida dispone que las entidades deben llevar los libros de contabilidad exigidos por las disposiciones legales vigentes. Y aunque el comentado libro no tuviera tal carácter, esto de ninguna manera implica que pueda admitirse la existencia de raspaduras o enmiendas, toda vez que existen modos de llevar los libros tanto en el primer caso como en el de los auxiliares. En ese orden de ideas, cabe consignar que en los asientos no se puede alterar el orden progresivo de las fechas; dejar blancos o huecos, pues todas las partidas deben suceder unas a otras, sin que entre ellas quede lugar para intercalaciones o adiciones; hacer interlineaciones, dado que cuando se cometan equivocaciones y omisiones se deben salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error; tachar asientos; mutilar alguna parte del libro; arrancar alguna hoja; alterar la encuadernación y foliación, etc. Las explicaciones de las defensas con relación a que los vales registrados en oportunidad del arqueo del 24.4.87 obedecían a pagos efectuados al personal de cafetería, no conciben con la documentación obrante a fs. 74/5, de la que se extrae que 2 de los 6 vales adjuntos tenían como beneficiario al presidente de la ex entidad, señor Mario Enrique Sáenz.

5.2 - Que, consecuentemente, teniendo en cuenta los elementos acreditantes de los hechos infraccionales y las defensas articuladas por algunos prevenidos que no desvirtúan cada una de las evidencias conformantes de la presente incriminación 5, cabe tener por comprobados los hechos que la configuran durante la inspección practicada con fecha de estudio al 30.09.86, y durante los meses de marzo y abril de 1987 (verificación del 24.04.87).

III - AGENTRA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

1 - Que luce a fs. 705/7 la Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 347 de fecha 16.8.95 la cual resolvió la exoneración de responsabilidad en el presente sumario a la entidad del título. Dicha Resolución destaca que la entidad del título fue sucesora de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A. y, en consecuencia, la apertura del presente sumario obedeció a la comprobación de hechos presuntamente infraccionales que no tuvieron un accionar irregular propio. La resolución analizada merita la circunstancia de que Agentra Compañía Financiera S.A. adoptó la decisión de cesar en las actividades propias de una entidad financiera, sin que existan perjuicios a esta Institución o a terceros particulares y, a su vez, pondera como circunstancia debilitante para perseguir la eventual sanción de una entidad financiera el hecho de estar solicitando su exclusión del sistema institucionalizado regido por la Ley de Entidades Financieras.

2 - Que en virtud de lo expuesto, cabe tener presente lo resuelto por la comentada Resolución N° 347/95 respecto de la exoneración de responsabilidad de la entidad financiera sumariada.

IV - Angel José PINI (Director Titular 13.3.87/12.10.88).

[Firma]

B.C.R.A.

783

1 - Que al sumariado se le instruyó sumario por su actuación en el ex Banco de Crédito Argentino (sumario 615 -Expediente N° 101.142/83-) y fue sancionado mediante la Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 402 del 30.11.99. Posteriormente, familiares del sancionado acreditaron su fallecimiento -ocurrido el 6.6.94-, dictándose en razón de ello la Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 194 del 29.11.02 mediante la cual se resolvió declarar extinguida la acción por tal suceso. Teniendo en cuenta lo manifestado se ha procedido a extraer del comentado expediente fotocopia del original de la partida de defunción para su incorporación en estas actuaciones, la que luce agregada a fs. 757/9.

En razón de lo expuesto, corresponde declarar extinguida la acción por fallecimiento del sumariado **Angel José PINI**, por asimilación al inciso 1° del artículo 59 del Código Penal.

V - Norberto LOPEZ ISNARDI (Director 13.3.87 y Presidente 27.4.87).

1 - Que cabe entender que al prevenido se le reprochan los cargos 1, 2, 3, 4 y 5.

2 - Que en la defensa interpuesta (fs. 384/6) el inculcado expresa que el período infraccional abarca principalmente el período que va de abril a octubre de 1986 (cargos 1 a 5), y que son nulos y de escasa magnitud los hechos acontecidos durante el mes de marzo hasta el 24.4.87. A continuación destaca los hechos relativos a su ingreso y actuación en la ex compañía financiera expresando al respecto que ha ocupado el cargo de director a partir del 13.3.87, en razón de que un grupo de personas físicas y jurídicas estaba interesado en adquirir el paquete accionario de la misma, y que su función inicial como miembro del grupo comprador era establecer las condiciones en que se encontraba la compañía financiera y fijar las pautas legales a seguir. Luego comenta que sus preocupaciones como director -dada la situación económica por la que atravesaba la entidad financiera a la época de los hechos imputados- debían orientarse hacia aspectos fundamentales de la gestión empresarial, para explicitar más adelante que las funciones administrativas y de control estaban a cargo del personal de la entidad preexistente a su ingreso, y que el control de dicho personal era responsabilidad del presidente y vicepresidente, quienes revestían tales cargos con anterioridad a su ingreso.

El inculcado López Isnardi manifiesta con relación al cargo 5 y, en específica referencia al arqueo llevado a cabo el 24.4.87, que esos hechos correspondían exclusivamente a la gestión administrativa y de control, la cual no se encontraba a su cargo, interpretando por ello que resulta totalmente exagerado atribuirle responsabilidad por el comentado arqueo "... si se pondera la naturaleza e importancia de la falla detectada y se la compara con la misión y funciones que tenía asignadas en la sociedad" (fs. 385 vta.). Expresa que se transcribió íntegramente en la reunión de Directorio del 27.4.87 la carta de este Banco Central que dispuso el arqueo y el acta labrada con motivo del mismo, arbitrándose en ese acto las medidas tendientes para que las irregularidades detectadas se corrigieran inmediatamente y no volvieran a ocurrir. Informa también que ese día se cambió íntegramente el directorio de la ex compañía financiera y a partir de esa fecha pasó a ser su presidente, añadiendo que a fines de 1986 la compañía financiera se encontraba al borde de la quiebra y, merced a la gestión que encabezó y al aporte de nuevos accionistas, se revirtió la situación imperante dando paso a una entidad financiera de solvencia patrimonial y moral.

B.C.P.A.

784

-14-

3 - Que el único cargo que puede serle achacado, dado el período de ocurrencia de los apartamientos formulados, es la faceta de la imputación 5 referida al arqueo de fecha 24.4.87 y a las deficiencias en el libro de Tesoro en razón de enmiendas, atrasos y falta de coincidencia con los partes diarios de caja, en razón de lo cual corresponde absolverlo de la comisión de los ilícitos 2 -facetas 2 y 3-, 3 y 4.

4 - Que el inculcado integraba el Directorio de la ex entidad financiera, cuyo actuar se inscribe en un contexto del que no puede abstraerse la ponderación y el análisis de los procederes relativos a la falta de confiabilidad de los registros contables y a las existencias de vales que implicaron un faltante de efectivo en caja, cobrando esto especial relevancia por el irregular marco de funcionamiento verificado, pues hechos similares ya habían sido cometidos poco tiempo antes. Cabe hacer notar también, y a pesar de lo sustentado por el prevenido, que las maniobras ilícitas detectadas a raíz del arqueo del 24.4.87 fueron consecuencia ineludible de una omisión propia de los deberes que le competían al desempeñar funciones dentro del Directorio. Por otra parte, el sumariado no niega los hechos configurantes de la infracción imputada, sino más bien intenta justificarlos, restarles importancia, señalando que tales procederes caían en la órbita de competencia de los sectores administrativos y de control, pero la realidad indica que los sucesos reprochados sólo existieron debido a la omisión de los deberes y obligaciones de quienes, como el encartado, estaban encargados de dirigir el órgano societario y vigilar el fiel cumplimiento de las normas reglamentarias dictadas por este Banco Central, en tanto organismo de control del sistema financiero.

Al inculcado sólo puede caberle reproche por los hechos relacionados con una faceta del apartamiento 5, esto es, los hechos detectados durante el arqueo realizado el 24.4.87 así como los relacionados con el atraso, las tachaduras y enmiendas del Libro de tesoro, y las falencias de los partes diarios de caja, cuya comisión ha sido posible por la tolerancia o negligencia evidenciada por el inculcado, pues aunque sea con un comportamiento omisivo, su proceder no resultó idóneo como para tener por cumplimentadas cabalmente las obligaciones y deberes que le competían al haber asumido funciones de conducción de una entidad financiera. Por otra parte, el prevenido debió estar alertado de que las irregularidades imputadas habían sido observadas anteriormente mediante el Memorando de conclusiones obrante a fs. 47/55 (puntos XI y XII) y, en tal caso, debió haber accionado a los efectos de encauzar la marcha societaria de manera reglamentaria, pues la mera alegación de que los desvíos fueron subsanados de manera inmediata no basta para eximir a los integrantes de los órganos ejecutivos de la entidad financiera, en tanto ello implique el incumplimiento de las obligaciones que le competían.

5 - **Pruebas:** La documental acompañada a fs. 387/92 fue analizada. La ofrecida a fs. 386 vta. fue proveída en el auto de apertura a prueba (fs. 534, punto 8, y fs. 535/6, puntos A, B y 4), en razón de lo cual la compañía financiera adjuntó la documentación obrante a fs. 587/677 y la Gerencia de Autorización de Entidades Financieras remitió -según consta a fs. 735, subfs. 2 y vta.- los Expedientes Nros. 25.048/87, 106.129/88 y 33.161/86, los cuales se encuentran acumulados a las presentes actuaciones, pero corren por cuerda separada.

6 - Que, en consecuencia, el señor Norberto LOPEZ ISNARDI resulta responsable por la infracción 5, pero sólo respecto a la parcialidad relacionada con el arqueo realizado el 24.4.87 del que da cuenta el acta obrante a fs. 72/3, cabiéndole absolución por la comisión de la otra parcialidad del ilícito 5, como también por los cargos 2 -facetas 2 y 3-, 3 y 4, en razón de lo expuesto en los puntos 3 y 4 de este Considerando, respectivamente. Asimismo,

B.C.R.A.

corresponde decretar su falta de responsabilidad por el cargo 1 y la faceta 1 del ilícito 2, en razón de la desestimación efectuada en los puntos 1 y 2 (primer párrafo) del Considerando II.

VI - Mario Enrique SAENZ (Presidente 2.7.82/4.87) y **Alejandro GONZALEZ** (Síndico Titular 2.2.81/5.4.88).

1 - Que a los prevenidos se les reprochan los cargos 1, 2, 3, 4 y 5.

2 - Que los prevenidos interpusieron, por medio de apoderado, el descargo que obra a fs. 394/414. En la defensa se plantea la caducidad de la instancia administrativa por haber transcurrido en exceso el plazo de 6 meses requerido por el artículo 310 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria, pues desde que se dictó la Resolución 763 del Presidente del Banco Central de fecha 10.8.90 hasta el 17.5.91 en que le fue notificada al señor Sáenz, no se produjo ningún acto procesal que pueda interrumpir la caducidad invocada. La defensa expresa seguidamente que la doctrina y jurisprudencia están contestes en que las normas de la Ley 19.549 y su decreto reglamentario 1759/72 son de aplicación supletoria en la tramitación de los sumarios que, como éste, se encuentran regulados por las Circulares B 757, R.F. 204 y R.F. 47, añadiendo que el decreto reglamentario 1759/72 en su artículo 111 dispone la aplicación supletoria del Código de forma comentado.

Luego la defensa solicita se decrete la nulidad de la Resolución 763/90 en razón de que la misma formula una serie de cargos objetivamente delimitados, pero subjetivamente genéricos e imprecisos; arguye que no imputa ninguna acción u omisión concreta que haya generado una conducta contraria a las normas. Sostiene que dicha Resolución es nula de nulidad absoluta en virtud de lo establecido por el artículo 14 de la Ley 19.549, pues entiende que hubo violación de la ley aplicable y se ha vulnerado el principio consagrado en el artículo 1° inciso f de dicha ley, que garantiza el debido proceso e incluye el derecho de defensa, en razón de la falta de la exposición clara y precisa de los hechos constitutivos de las presuntas transgresiones, los elementos de juicio surgidos de los hechos imputados, la participación propia y personal asignada a cada una de las personas acusadas y el grado de responsabilidad que se le atribuye.

El apoderado del inculcado se opone a la agregación a este sumario de todo documento de fecha anterior a su escrito de defensa, alegando que el Presidente de este Banco Central no hizo uso del derecho a declarar el carácter reservado de determinadas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes, otorgado por el artículo 38 del decreto 1759/72 reglamentario de la Ley 19.549, de aplicación supletoria según el artículo 2 del decreto 9101/72. Igualmente se opone a la formulación de cualquier nuevo cargo que se base en los documentos obrantes en este sumario, en nuevos elementos producidos por esta Institución o aportados a la causa, en virtud del principio de la preclusión que debe primar en todo proceso, en el entendimiento de que el Código Procesal Civil y Comercial rige supletoriamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 del decreto 1759/72. También expresa que la Resolución de apertura es nula de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la Ley 19.549, en virtud de que el Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina ha prejuzgado acerca de la actuación de los funcionarios que representaban a la entidad financiera.

El descargo aborda temas, tales como las facultades disciplinarias exorbitantes de la Ley 21.526, el monto de la multa, la apelación al solo efecto devolutivo, formulando además una serie de consideraciones generales sobre la dificultad creada por la gran cantidad de normas y la inacción del Banco Central que demuestra lo inoperante e ineficaz de sus pretensiones

[Handwritten signature]

B.C.P.A.

786

-16-

punitivas. En otro acápite de la defensa se expresa que resulta inconstitucional la pretensión de contrariar lo sostenido anteriormente, mediante la invocación del artículo 14 de las Circulares B 757 e I.F. 204, referentes a las normas procesales para el trámite de los sumarios.

3 - Que el argumento de caducidad de instancia por la falta de impulso procedimental entre la fecha en que se dictó la Resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina N° 763 (10.8.90) y aquella en que se efectuó la notificación cursada al señor Sáenz (17.5.91), por aplicación supletoria del artículo 310 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no corresponde ser acogido. Al respecto, cabe manifestar que tanto las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como las normas de la Ley 19.549 y su decreto reglamentario 1759/72 no resultan aplicables al trámite del presente sumario, ya que este proceso sumarial se encuentra sujeto a las normas especiales de procedimiento establecidas por la propia autoridad de aplicación, conforme lo establecido por el artículo 41 de la Ley 21.526. También corresponde expresar que esta Institución, en uso de sus facultades y conforme surge de la Comunicación "A" 90, estatuyó un procedimiento que ha prescindido del instituto "in examine", en orden a lo cual deviene inoficiosa su introducción, por vía de aplicación supletoria tanto de las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.549 como las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por otra parte, existe una intensa actividad desarrollada por la instrucción sumarial que ha motivado el dictado del auto de apertura a prueba de fecha 15.10.93 (fs. 533/6), las notificaciones cursadas (fs. 537/43), acompañándose a fs. 544, 546/51, 553/8, 559/60, 561/2, 563/4, 565/85, 586/680, 686, 690, 691/2, 693/6 los escritos y la documentación acompañada durante ese estadio procesal. Además, se ha emitido el auto ampliatorio de prueba de fecha 12.7.95 (fs. 697/700), procediéndose el 10.8.99 a clausurar el período de prueba (fs. 742/3), todo lo cual evidencia que no existió paralización alguna del expediente sumarial ni tampoco inactividad procedimental.

La oposición del apoderado de los inculcados analizados a que se agregue documentación de fecha anterior a su escrito de defensa, en virtud de la omisión de declarar la reserva de ciertas actuaciones de acuerdo a lo estipulado por el artículo 38 del decreto 1759/72, deviene improcedente en virtud de la prelación de las normas propias dictadas por esta Institución, resultando, por ende, inaplicable la norma legal invocada.

En otro orden de ideas, la queja sobre la formulación de los cargos no resulta válida, por cuanto el informe acusatorio N° 461/490/90 (fs. 328/37) como también la Resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina N° 763/90 que dispuso la instrucción del presente sumario (fs. 338/9), describen claramente los hechos que constituyeron violación a la normativa vigente, detallándose las transgresiones imputadas en base a sus hechos configurantes, las disposiciones violadas, el material probatorio que se pretende hacer valer y el fundamento de sospecha de cada uno de los sumariados.

La defensa se refiere al prejuzgamiento del Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina en ejercicio de la Presidencia, en razón de lo cual deviene conveniente formular algunas apreciaciones sobre el poder disciplinario desarrollado por esta Institución. En ese marco no resulta acertado decir que la Resolución del Presidente de este Banco Central N° 763/90 ha efectuado prejuzgamiento, pues el propio Informe acusatorio N° 461/490/90 expresa con toda claridad que de los antecedentes de autos surge "prima facie" que se habrían producido apartamientos a la normativa financiera, respecto de los cuales procedería determinar las responsabilidades en que podrían haber incurrido la entidad y los encargados de la administración y fiscalización de la misma al tiempo de los hechos (ver fs. 328).

[Handwritten signature]

B.C.R.A.

787

Además, resulta del caso destacar que esta Institución cumple con un mandato legal al sustanciar los sumarios dispuestos por el art. 41 de la Ley N° 21.526, razón por la cual no puede entenderse, de manera alguna, que este Banco Central al ajustarse a lo establecido en las leyes incurra en prejuzgamiento. A mayor abundamiento, cabe tomar en consideración que tal Resolución sólo reprocha el incumplimiento de normas específicas que regulan el funcionamiento del sistema financiero de acuerdo a la Ley de Entidades Financieras y sus reglamentaciones, previo sumario que se instruye con audiencia de los imputados, no habiendo existido -hasta ahora- pronunciamiento definitivo alguno sobre la actuación de quienes actuaron en la ex entidad financiera.

Respecto al cuestionamiento de las facultades disciplinarias de la Ley de Entidades Financieras planteado por la defensa, no es de competencia de esta instancia expedirse sobre el particular. No obstante, procede recordar que se han pronunciado por su validez la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 19.11.81 -autos "Banco de Río Negro y Neuquén c/BCRA-" y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en sentencias del 18.9.84 -autos "MARFINCO S.A. s/recurso de apelación Resolución N° 73/82 del BCRA"- y del 23.4.85 -autos "ALVAREZ, Celso Juan y Otros c/Resolución N° 166 del Banco Central s/apelación-", entre otras.

En consecuencia, cabe rechazar los planteos defensistas deducidos en virtud de los cuales la defensa bajo análisis solicita se decrete la nulidad de la Resolución N° 763 del 10.08.90.

4 - Que el encartado Sáenz no niega la ocurrencia de los apartamientos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5 imputados, aunque intenta morigerar sus efectos con explicaciones que no alcanzan a exculparlo, debido a que los hechos que los generaron acaecieron durante el lapso en que se desempeñó dentro del Directorio del banco, en el cargo de máximo nivel. Al respecto, cabe expresar que el contenido infraccional de las anomalías queda enmarcado por el desarrollo de distintas operatorias, cuya puesta en marcha pudo haber tenido origen en las instancias inferiores y hasta auxiliares, pero no se concretaba sin la anuencia del órgano de conducción de la ex entidad, presidido por el prevenido. Ello sin dejar de hacer notar que el rol que caracterizaba el sumariado, como Presidente, le otorgaba una injerencia ejecutiva preeminente en el manejo de los negocios sociales referidos al manejo del Tesoro, de la caja, de la contabilidad y de la información a rendir a este Banco Central, aspecto que aparece totalmente acreditado con el testimonio de fs. 726/7, sin olvidar que tuvo el inculpado una preponderante intervención en los hechos relacionados con el arqueo de caja del 13.10.86 y aparece, además, como uno de los beneficiarios de los vales de caja encontrados durante el transcurso del arqueo del 24.4.86 (cargo 5).

Por otra parte, cabe también considerar que las anomalías imputadas se prolongaron un lapso suficientemente amplio durante el cual el prevenido pudo haberse dedicado al ejercicio de sus funciones de dirección en la forma legalmente prescripta y, si en tal período no pudo hacer cesar las irregularidades, deviene forzoso admitir ante los resultados de su gestión como presidente que no cumplió con los deberes y obligaciones inherentes a la función asumida.

5 - Que el descargo en análisis realiza una consideración específica respecto a la función de síndico que realizaba el señor González en Pérez Artaso Compañía Financiera S.A. Al respecto, expresa que no le incumbía fijar la política de créditos ni el llenado de fórmulas a

g
g

B. C. R. A.

788

-18-

presentar a esta Institución y que, como el Estudio Deloitte Haskins & Sells -en su carácter de auditores externos- estaba a cargo de la revisión e informe del balance anual y trimestral, estimó innecesario revisar la totalidad de la documentación contable y administrativa.

6 - Que las aseveraciones de la defensa llevan ineludiblemente a considerar el tipo de tareas para las que había sido designado el señor González como miembro de la Sindicatura y le quedaban reservadas, pues aún cuando las normas reglamentarias imputadas no indiquen una responsabilidad específica a los encargados de la fiscalización privada, éstos debían vigilar que los órganos sociales dieran debido cumplimiento a la ley, los estatutos y las disposiciones reglamentarias.

Los cargos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5 tuvieron lugar en el período en que el señor González se desempeñó como síndico, en razón de lo cual el deber de control y fiscalización inherente a esa función compromete su responsabilidad. Ello así por cuanto el sumariado debía vigilar que la actividad de la entidad bancaria se desarrollara dentro de la normativa que la rige, incluso controlando la legalidad de las decisiones adoptadas por el órgano de gestión. Las constancias de autos evidencian que éste ejerció las funciones asumidas sin preocuparse por cumplir acabadamente con los deberes y obligaciones inherentes a ellas, pues los hechos generadores de los cargos imputados acaecieron mientras tenía el deber de fiscalizar que en la entidad financiera no se cometieran desvíos normativos.

El síndico debe controlar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatutos y decisiones de las asambleas lo que importa un control de legalidad y legitimidad que, en el caso específico, debe extenderse a los requisitos impuestos por la Ley de Entidades Financieras y sus normas reglamentarias, ya que las funciones de la Sindicatura no se limitan a salvaguardar el patrimonio de la sociedad, sino que deben constituirse en garantía de una correcta gestión y la tutela del interés público.

7 - Pruebas: La documental agregada al sumario y la acompañada a fs. 418/40 fue exhaustivamente analizada, no habiéndose proveído la documental solicitada a fs. 412, punto 5, por no tener relación alguna con los hechos investigados. En el auto de apertura a prueba se dispuso -en principio- el diferimiento de la producción de la pericial caligráfica ofrecida a fs. 412, punto b, relacionada con la autenticidad de las firmas del señor Luis A. Korman en la boleta de retiro de fondos de una caja de ahorros N° 2815/0/01 y del señor José Pirillo en dos cheques (ver fs. 535, puntos 10, D y E), la cual finalmente no se concretó debido a que uno solo de los elementos solicitados fueron aportados pero en fotocopia (ver fs. 678), situación ésta que impidió su cumplimiento. La testimonial propuesta (fs. 412, punto c) no se produjo (fs. 533, punto 5), toda vez que no se acompañó el pliego del interrogatorio correspondiente conforme lo establecido en el punto 1.2.2.8.2 de la Comunicación "A" 90. La informativa peticionada (fs. 412 y vta., punto d) fue acogida en el auto de apertura a prueba (fs. 534, punto 8 y fs. 536, punto 3), acompañándose las notas y documentación remitida por el Banco de Boston, la Caja de Valores, el Diario Ámbito Financiero y la sociedad Mercado Abierto S.A. (ver fs. 559/ 62, fs. 565/85 y fs. 690).

8 - Que, por lo expuesto, teniendo en cuenta que las infracciones se encuentran probadas en el Considerando II, es procedente atribuir responsabilidad al señor **Mario Enrique SAENZ** por la comisión de los apartamientos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5, en las que se meritara la especial participación que tuvo en la comisión de las mismas. También se le adjudica responsabilidad al señor **Alejandro GONZALEZ** por la comisión de los apartamientos 2 -

B.C.P.A.

705

789

facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5, en razón del indebido ejercicio de funciones de fiscalización. A ambos prevenidos no les cabe responsabilidad por los cargos 1 y 2 -faceta 1-, en razón de la desestimación efectuada en los puntos 1 y 2 (primer párrafo) del Considerando II.

VII - Roberto Antonio PUNTE (Síndico Titular 2.2.81/2.6.86).

1 - Que a este sumariado se le imputan los cargos 1, 2, 3, 4 y 5 formulados en el presente sumario.

2 - Que la defensa del apoderado del sumariado luce a fs. 475/7; hace suyos los descargos, las excepciones, las pruebas y los pedidos formulados en el escrito de descargo de los inculcados analizados en el Considerando precedente, respecto de todo lo cual caben las consideraciones formuladas en el punto 3 del mismo, en donde se examinaron los fundamentos que motivaron el no acogimiento del pedido de nulidad de la Resolución 763 del 10.08.90, al que corresponde remitirse. También adhiere a las razones esgrimidas en dicho descargo por el síndico González, atento lo cual corresponde remitir a las contestaciones expuestas en el punto 6 del Considerando anterior. Opone la falta de legitimación pasiva para ser sumariado por los cargos imputados en razón de no haber desempeñado cargo alguno al tiempo de los hechos, destacando que presentó la renuncia al cargo de la Sindicatura el 2.5.86 y que la misma fue aceptada en el acta de Directorio 175 del 2.6.86.

3 - Que en cuanto al período de actuación del prevenido, cabe tener por cierto el período de desempeño alegado, pues surge del acta de Directorio N° 175 del 2.6.86 obrante a fs. 599 vta. que en esa oportunidad se procedió a aceptar la renuncia presentada por el inculcado.

Asiste también razón al inculcado en el sentido de que durante la comisión de las anomalías 2 -facetas 2 y 3-, 3 y 5 no desempeñaba el cargo de síndico, correspondiendo mantener la imputación sólo con relación a la anomalía 4, toda vez que la misma principió en abril de 1986 y el inculcado recién se desvinculó de la entidad financiera en junio de ese año.

Las constancias de autos evidencian que los hechos generadores del cargo 4 se produjeron mientras el inculcado tenía el deber de fiscalizar que la actividad del órgano de gobierno del banco sumariado diera estricto cumplimiento a la Ley de Entidades Financieras y sus normas reglamentarias, en razón de lo cual cabe sostener que ejerció funciones dentro de la Sindicatura incumpliendo con los deberes y obligaciones inherentes a ellas.

4 - **Pruebas:** Dada la adhesión a las probanzas ofrecidas por los inculcados analizados en el Considerando VI, cabe remitir en homenaje a la brevedad al acápite de prueba (punto 7). La documental acompañada (fs. 479/84) ha sido evaluada, no siendo necesaria producir la pericial contable ofrecida en subsidio a fs. 477 vta., punto 2, dado que no se duda de la autenticidad de la documentación agregada. La documental solicitada a fs. 477 punto 1 fue sustituida en el auto de apertura a prueba por un pedido de informes cursado a la ex entidad (fs. 534, punto 8 y fs. 535, punto C), el que fue respondido según surge de fs. 586 y vta.

5 - Que, por todo lo expuesto, cabe declarar la responsabilidad por el indebido ejercicio de funciones de fiscalización del señor **Roberto Antonio PUNTE** por la imputación 4, debiendo ponderarse el menor lapso de actuación desarrollado durante su comisión, y corresponde decretar su absolución por las irregularidades 2 -facetas 2 y 3-, 3 y 5. A este

[Handwritten signature]

B.C.P.A.

790

prevenido no le cabe responsabilidad por los cargos 1 y 2 -faceta 1-, en razón de la desestimación efectuada en los puntos 1 y 2 (primer párrafo) del Considerando II.

VIII - Jorge Alberto LOSICER (Director 10.5.84/13.3.87).

1 - Que a este sumariado se le imputan los cargos 1, 2, 3, 4 y 5 formulados en el presente sumario.

2 - Que en la defensa interpuesta (fs. 485/523) el incoado comienza dando una semblanza de su actuación en la ex compañía financiera, manifestando al respecto que ésta comenzó tras la solicitud del señor Alfredo A. Román, quien le pidió que lo sustituyera como representante directo y personal de los accionistas, como así también para atender las cuestiones y gestiones relativas a la venta de la entidad. Expresa que aceptó el cargo ofrecido frente a seguridades, tales como la actuación tanto del señor Sáenz y la Comisión Fiscalizadora, como la Auditoría Externa desempeñada por la firma Deloitte, Haskins & Sells. Además, comenta que fue formalizado, a su pedido, el Memorando del 15.4.85 emitido y firmado por el entonces presidente y gerente general, Dr. Mario E. Sáenz, en el que quedaron circunscriptas las áreas de la Gerencia Financiera, Comercial, Secretaría Legal y General, las cuales fueron asignadas a diversos directores, destacando que no tuvo cargo alguno en ninguna de ellas. Comenta la defensa los impulsos de los años 1985/86 tendientes a concretar la venta de la compañía financiera y la peculiar situación creada por el pedido de autorización para su transferencia, con las conocidas perturbaciones que ello aparejaba en la vida comercial, financiera y administrativa, la demora de esta Institución en pronunciarse al respecto, y su concreta actuación en orden a las reales funciones que venía cumpliendo.

La defensa sostiene -bajo el título en el que alude a la inconstitucionalidad de la ley, la nulidad y, en su caso, la imperiosa necesidad de equilibrio-, que la Ley 21.526 instituye al Banco Central en acusador y juez de las ilicitudes que pudiera detectar en las entidades sometidas a su imperio, facultándolo para imponer sanciones pecuniarias de enorme significación, lo que contraviene el principio de separación de los poderes, las garantías de propiedad y del debido proceso sustantivo y formal, con agravio de los artículos 1, 17, 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional. También plantea el tema de que esta Institución se erige en acusador y juez de su propia acusación y hasta beneficiario de la pena de multa establecida en el artículo 41 de la Ley 21.526. Manifiesta que, en lo que respecta a su persona, la Resolución 763 de apertura sumarial no cumple con el requisito imputativo que dimana del artículo 41 de la Ley 21.526 y del punto 1.2.2.2.2 de la Comunicación "A" 90, que alude a personas responsables de presuntas infracciones susceptibles de ser sancionadas, consignando que no puede ser imputado porque los cargos le son formulados en una forma que no permite inferir qué acciones han sido valoradas como para considerar comprometida su responsabilidad. Expresa ser de aplicación subsidiaria y analógica la caducidad de la instancia, en similares términos a los vertidos por los sumariados analizados en el considerando VI (punto 1). En razón de ello interpreta que la Resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina N° 763 se dictó el 10.8.90 y, en esa fecha, comenzó a correr el plazo potestativo (6 meses) para impulsar el proceso antes de que éste caducara, es decir, antes del 9.2.91, aunque a continuación aclara que esta Institución notificó esa Resolución el 27.5.91 cuando ya había vencido el término que establece el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

B. E. P. A.

La defensa aduce que "... los cargos económicos impuestos se analogan con la pena de multa; por lo que la cuestión ha quedado con los efectos de la cosa juzgada y penada siendo de aplicación la regla del 'non bis in idem'" (fs. 497 y vta.). Manifiesta que los actos de satisfacción a las indicaciones del poder de policía preventivo tienen efecto vinculante para esta Institución y que la doctrina de los propios actos impide luego volver sobre esos actos con miras a aplicar una sanción por hechos que fueron inexactamente valorados, o bien, quedaron regularizados con su expresa intervención y a su entera satisfacción. Arguye que la responsabilidad omisiva que cabe atribuir a un director por su supuesta culpa "in vigilando" no puede ser apreciada en abstracto, sino que depende de su concreta capacidad real para evitar el resultado, destacando que el satisfactorio acatamiento de las intimaciones o recomendaciones efectuadas por esta Institución obsta a la ulterior punición de la entidad o de las personas que cumplieron esas órdenes.

El descargo en análisis señala que tareas, como por ejemplo, la verificación de la exactitud de los datos sobre relaciones técnicas elaborados por la línea gerencial, la instrumentación material de operaciones de crédito y sus garantías, la corrección de los registros contables y el control del contenido de las fórmulas informativas remitidas al Banco Central, no integran el deber de gestión social diligente del director de una entidad financiera. Continúa expresando el descargo que las infracciones, en estas materias técnico-administrativas, no integran la noción de conducción y administración de la entidad ni comprometen la responsabilidad de un director, salvo que éste las haya expresamente asumido, o que, habiendo conocido efectivamente su existencia y pudiendo evitarlas, no lo haya hecho. En otra parte de la defensa se alude a que la entidad y sus directivos fueron efectivamente sancionados con la pena de llamado de atención y apercibimiento, pues no de otra forma puede interpretarse la recepción de las observaciones, la compulsión a su acatamiento y la transcripción al libro de Directorio. Destaca que esta Institución jamás experimentó el menor daño o perjuicio a results de la actividad de Pérez Artaso, situación que ahonda el carácter puramente ritual de los cargos formulados y la efectiva razonabilidad de considerar que aquellas supuestas inobservancias, una vez corregidas, significaron el llamado de atención y apercibimiento que previenen los incisos 1 y 2 del artículo 41 de la Ley 21.526. Menciona que esta Institución no puede aplicar sanciones en contradicción con sus propios actos anteriores de eficacia vinculante, destacando, al respecto, que no es factible admitir que la misma autoridad que en 1987 aprobó la transferencia íntegra del paquete accionario, con los consabidos y muy severos controles que esa autorización necesariamente implica -por imperio de su propia normativa-, pretenda sanciones por actos anteriores que conocía acabadamente.

En el alegato interpuesto el sumariado manifiesta que "... las mismas, idénticas, consideraciones que esa autoridad ha concebido y desarrollado para absolver a la persona jurídica sumariada, debe ahora aplicar a sus ex directivos, las personas físicas aún procesadas" (fs. 755 subfs. 9 vta.).

3 - Que ya han sido tratados los temas inherentes a las presuntas contravenciones constitucionales por las facultades atribuidas a esta Institución, la caducidad de instancia, como también a las carencias del acto acusatorio, razón por la cual cabe remitir en homenaje a la brevedad al precedente Considerando VI punto 3, en donde se examinaron esos tópicos de manera extensa.

Sin perjuicio de ello, con respecto al doble carácter de juez y parte contraria que le atribuye a esta Institución, cabe también desestimarla en virtud de la jurisprudencia que ha

792

-22-

B.C.R.A.

resuelto que: *"En lo que atañe a la validez de la actuación cumplida en la especie por el Banco Central de la República Argentina, como bien lo destaca el señor Fiscal de Cámara, en su dictamen de fs. 702, la índole de las funciones que cumple el ente rector del sistema monetario nacional permite desechar la defensa referida a la presunta identidad de juez y parte que habría mediado en este caso".* Y agregó que el *"Banco Central se encuentra especialmente habilitado para la investigación y evaluación de hechos como los que subyacen al presente caso, tanto por los medios especializados de que dispone como por la naturaleza esencialmente técnica de esos hechos. Y en cualquier hipótesis, la necesaria independencia de la labor jurisdiccional queda siempre a salvo mediante el acceso a la vía judicial..."* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, Causa N° 13.004, sentencia del 30.7.87, en autos "GOMEZ, Edgardo Gualberto, MULLEADY, Luis María y BARREIRA, Ernesto José c/Resolución N° 23/86 B.C.R.A. s/apelación art. 42 Ley 21.526"). En razón de lo expuesto corresponde desestimar el planteo de nulidad impetrado en la defensa.

Respecto al argumento esbozado por la defensa con relación a una especie de equivalencia entre los cargos que pudieron imponerse por excesos en las relaciones técnicas y la pena de multa, cabe expresar que ambos institutos nada tienen en común, pues responden a diferente naturaleza. La doctrina de los propios actos planteada por la defensa en razón del efecto vinculante de los actos de la entidad financiera aceptando las indicaciones formuladas por esta Institución, que impediría la responsabilización en razón de la regularización de los hechos reprochados, corresponde ser desestimada. Ello así pues existe absoluta independencia entre los actos ocurridos con motivo de las intimaciones o recomendaciones formuladas a la entidad financiera a raíz de la visita de una inspección y la responsabilidad que se determine en sede administrativa tras investigar las conductas de los inculcados desde el punto de vista de la Ley de Entidades Financieras y sus normas reglamentarias, a pesar de tratarse de los mismos hechos.

En cuanto al argumento expuesto por la defensa acerca de la exoneración de responsabilidad de la entidad financiera en el sumario que se les sigue a los directores, cabe indicar que la facultad discrecional sobre la decisión de exculpar a la entidad lejos de resultar arbitraria como se indica en el alegato en análisis, surge de manera explícita del propio texto del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, que en su parte pertinente establece que las sanciones serán aplicadas por la autoridad competente a las personas o entidades o ambas a la vez, que sean responsables de las infracciones enunciadas precedentemente, previo sumario que se instruirá con audiencia de los imputados, con sujeción a las normas de procedimiento que establezca la indicada institución.

4 - Que lo aducido por el prevenido respecto a las seguridades brindadas por la actuación de determinadas y muy calificadas personas (el presidente Sáenz, los miembros de la Sindicatura y la Auditoría Externa desempeñada por la firma Deloitte, Haskins & Sells) que lo impulsaron a aceptar la designación como director, no sólo no puede erigirse como argumento exculpatario sino que deviene -por la simple lectura del descargo confrontada con la realidad de los hechos sucedidos- en el sustento mismo de un proceder que no puede calificarse de adecuado. Ya que primero materializó su ingreso como director de la entidad y luego solicitó la elaboración de un Memorando en el fueron atribuidas distintas áreas a diversos directores menos a él; pero acontece que ello no lo releva de las responsabilidades que aparea el aceptar desempeñarse en el órgano de conducción de una entidad financiera.

Los argumentos de la defensa pretenden anular la responsabilidad del señor Losicer puntualizando la circunstancia relacionada con la no obligatoriedad de verificar

B.C.P.A.

793

procesos, tales como los datos de las relaciones técnicas, la instrumentación de operaciones de crédito y aspectos del régimen informativo, mas tales planteos no pueden prosperar, ya que aunque existieran áreas en particular de la entidad a las que correspondiese efectuar un control dentro de su específica competencia, ello no relevaba al prevenido, como integrante del Directorio de la realización de un control general y coordinado, pues, de lo contrario, la existencia de este cuerpo societario en las entidades financieras carecería de sentido.

Las expresiones de la defensa sobre el alcance de la responsabilidad del director (conocer la irregularidad y no hacerlo pudiendo evitarlo) carecen de asidero, por cuanto el Directorio debía vigilar la marcha de los negocios que encaraba la entidad financiera y, precisamente, las irregularidades sólo pudieron llevarse a cabo por haber mediado una suerte de delegación rayana en una prescindencia negligente, dado que no es dable suponer que las transgresiones hubieran pasado desapercibidas de haber actuado el sumariado con la diligencia propia e ínsita en su función de director, con la cual -además- hubiera podido adoptar o propugnar los recaudos para su corrección.

Frente a la consideración de la defensa con relación a que a la ex entidad y sus autoridades ya se les ha aplicado un llamado de atención y apercibimiento en razón de haber aceptado las observaciones formuladas por esta Institución, se torna necesario dejar bien establecido que las objeciones que este Banco Central efectuó por medio del Memorando de Conclusiones sólo tuvo por objeto poner en conocimiento de la compañía financiera los procedimientos que se apartaban de lo establecido en las normas reglamentarias, no aparejando ninguna de las consecuencias que son inherentes al sumario previsto por el artículo 41 de la Ley 21.526, aunque eventualmente pudieran versar sobre los mismos hechos. En efecto, la sustanciación del presente sumario en lo financiero se circunscribe exclusivamente a aplicar las sanciones establecidas en el artículo 41 de la Ley N° 21.526, a quienes resulten responsables por la comisión de hechos que constituyen apartamientos a las conductas impuestas por la Ley de Entidades Financieras y sus disposiciones reglamentarias.

Las alusiones con relación a la ausencia de daño o perjuicio en razón de la actividad desarrollada por la ex entidad, procede puntualizar que tales extremos no necesariamente deben encontrarse presentes para convalidar la instrucción sumarial, pues la asignación de responsabilidad estriba en la falta de acatamiento a la normativa financiera, no siendo imprescindible que haya habido daño concreto con el accionar antirreglamentario.

5 - Que el inculcado no niega ni controvierte la existencia de los ilícitos que han sido fehacientemente acreditados (2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5), observándose que los principales argumentos mediante los cuales intenta el prevenido excluir su responsabilidad se basan en que los mismos escapaban a sus tareas como miembro del Directorio. Es decir, se trata de argumentaciones genéricas y relativas al aspecto subjetivo de las imputaciones que carecen de eficacia exculpatoria. Estas menciones no permiten relevarlo de responsabilidad, aunque intenta minimizar su función como director aduciendo que no tuvo área alguna a su cargo, siendo que nada acredita que orgánicamente la distribución de tareas haya significado que hubiese "directores" ocupados de los negocios propios de la ex compañía financiera y otros "directores" encargados en funciones anexas o diferentes o de menor importancia o entidad.

En consecuencia y no resultando del expediente dicha pretendida situación subalterna, la consideración del sumariado debe ser medida a la luz de las atribuciones, roles y facultades de cualquier director.

B.C.R.A.

794

En cuanto a los cargos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5, que se le imputan al inculcado y que han sido debidamente probados, en virtud de la función desempeñada como directivo de la ex entidad, debe destacarse que dichas irregularidades no pudieron ser ajenas a los directores toda vez que el Directorio -órgano que integraba el sumariado- debía dirigir y conducir a la entidad en todos sus aspectos, obligación que se extiende a cada uno de los directores y de la cual no quedan relevados por delegación de funciones. Dado pues que el sumariado en tanto miembro del Directorio estaba legalmente habilitado tanto para promover los controles de la actividad de la entidad financiera, cuanto para ejercer una razonable verificación del legal funcionamiento de la misma, el haber declinado u omitido ejercer esas facultades que le competían lo hace incurrir en responsabilidad, pues esa conducta se convirtió a su vez en un incumplimiento de los deberes inherentes a su función.

Además, la vigencia del lapso en que sucedieron los ilícitos y el hecho de que su consumación no haya sido ajena al área de gestión y supervisión del Directorio, no existe duda que con un mínimo de diligencia inherente a la función desempeñada hubiera sido suficiente para realizar la prevención o, en su caso, la rectificación de las faltas incriminadas. Como consecuencia de todo lo expuesto, la responsabilidad del señor Losicer frente a las irregularidades imputadas tiene sustento en la omisión de los deberes propios del rol, toda vez que se ha encontrado objetable el ejercicio de la función desempeñada.

6 - Pruebas: La documental agregada a fs. 524/7 fue analizada. La pericial caligráfica ofrecida en subsidio a fs. 522 y vta., punto 1.1, subpunto a, no fue producida debido al reconocimiento como propia de la firma inserta en el Memorandum de fecha 15.5.85 (fs. 524/5) efectuado por el señor Mario Enrique Sáenz, según consta a fs. 709 (ver fs. 534, punto 8, fs. 695, punto a, y fs. 709). La instrumental pedida a fs. 522 vta., puntos 1.1, subpuntos b, c y d, fue acogida en el auto de apertura a prueba mediante la limitación de los libros de actas de asambleas y del Directorio al período abril 86/abril 87 (fs. 534, punto 8 y fs. 536, punto 4), en razón de lo cual luce a fs. 587/677 la documentación acompañada por la ex entidad, remitiendo la Gerencia de Autorización de Entidades Financieras los Expedientes N° 25.048/87, 106.129/88 y 33.161/86 que corren como Anexos por cuerda separada, según se consigna a fs. 735 subfs. 2 y vta. La documental ofrecida a fs. 522 vta., punto 1.2, primer párrafo, relativa a la exhibición del libro de actas del Directorio de este Banco Central donde consta la decisión adoptada al emitir la Resolución 763 del 10.8.90, fue proveída en el auto obrante a fs. 695, punto b, luciendo a fs. 734 subfs. 2 la información suministrada por la Secretaría del Directorio de esta Institución. La instrumental pedida a fs. 522 vta., punto 1.2, segundo párrafo, referida al pedido de agregar a las actuaciones la información pública emitida por esta Institución, ha sido acogida en el auto de fs. 695, punto e, obrando a fs. 728/30 la documentación respectiva. La testimonial pedida a fs. 522 vta./3, punto 2, fue proveída a fs. 534, punto 9, cumpliéndose con el trámite con respecto a dos de los tres testigos aceptados, dado que se desistió de la declaración de uno de ellos y la de otro (el co-incipado José Fernández) no fue acogida en virtud de las razones vertidas a fs. 534, punto c, que deben tenerse aquí por reproducidas (ver fs. 718, 726/6 y 741). La informativa peticionada a fs. 523 vta. punto 3.1, puntos a -sustituido por los libros de actas de Asambleas y de Directorio-, b y c, fue proveída en el auto de apertura a prueba (fs. 534, punto 8 y fs. 535, puntos A, B, Informe a), b) y c), en razón de lo cual se ha remitido la información y documentación obrante a fs. 586/677. La informativa pedida a fs. 523 vta. punto 3.2, fue rechazada en el auto de prueba ampliatorio obrante a fs. 695, punto d, cabiendo reproducir los fundamentos allí expuestos.

[Handwritten signature]

B.C.R.A. 83 795

7 - Que por todo lo expuesto corresponde declarar la responsabilidad por el indebido ejercicio de funciones directivas del señor **Jorge Alberto LOSICER** por las imputaciones 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5, cabiendo ponderar el menor lapso de actuación que tuvo respecto a la última de las anomalías nombradas. No le cabe responsabilidad por los cargos 1 y 2 -faceta 1- en razón de la desestimación formulada en los puntos 1 y 2 (primer párrafo) del Considerando II.

IX - Roberto Manuel ROMERO (Vicepresidente 2.7.82/13.3.87 y Gerente General).

1 - Que a este sumariado se le imputan los cargos 1, 2, 3, 4 y 5 formulados en el presente sumario.

2 - Que este sumariado presentó escrito de defensa (fs. 471/2) en el que adhiere a la formulada por los inculpados analizados en el Considerando VI, por lo que las consideraciones que merecieron sus argumentaciones merced a las cuales ha sido solicitado se decrete la nulidad de la Resolución 763 del 10.08.90, fueron rebatidas en el punto 3 de dicho Considerando, al que corresponde efectuar reenvío en homenaje a la brevedad.

3 - Que teniendo en cuenta la naturaleza, entidad y duración de los ilícitos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5 y las funciones desempeñadas por el inculpadado (vicepresidente y gerente general), estaba éste en condiciones de detectar e impedir las anomalías verificadas, no pudiendo válidamente desconocerlas, por lo que no hay justificación legal que permita excusar el incumplimiento a las normas emanadas de este Banco Central. No resulta admisible que el inculpadado asumiera una actitud sin siquiera requerir información, frente a operaciones que debían ofrecer dudas a quien se desempeñara diligentemente en las actividades a su cargo. Al contrario, existe la plena convicción de que estando legalmente habilitado para conocer las irregularidades acaecidas y adoptar los recaudos indispensables, el prevenido no agotó su cometido y más bien había sumido su labor en una pasividad que ha menester reprochar.

Las constancias de autos no hacen sino demostrar su desempeño personal dentro de la caracterización generalizada de desatención de los obligaciones propias de los directivos de la compañía financiera aquí analizada, situación que amerita decretar su responsabilidad por la comisión de las anomalías imputadas.

4 - **Pruebas:** La documental peticionada (fs. 471 vta., punto 5, subpunto 1) fue acogida en el auto de apertura a prueba (fs. 534, punto 8 y fs. 535 puntos A y B), acompañándose la documentación que luce a fs. 586/677. La informativa ofrecida a fs. 471 vta./2 fue proveída en el auto de apertura a prueba (fs. 536, punto 3), glosándose a fs. 563/4 la contestación que mereciera el oficio presentado.

5 - Que, en consecuencia, procede endilgar responsabilidad al encartado **Roberto Manuel ROMERO** por los cargos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5, cabiendo ponderar el menor lapso de actuación que tuvo respecto a la anomalía 5. No corresponde adjudicarle responsabilidad por los cargos 1 y 2 -faceta 1- en razón de la desestimación efectuada en los puntos 1 y 2 (primer párrafo) del Considerando II.

 **X - José Héctor FERNANDEZ** (Síndico 2.7.82/5.4.88).

B.C.P.A.

796

1 - Que a este sumariado se le imputan los cargos 1, 2, 3, 4 y 5 formulados en el presente sumario.

2 - Que en la defensa incoada (fs. 475) el apoderado del prevenido también adhiere a la interpuesta por los inculcados tratados en el Considerando VI, por lo que tales argumentos (por medio de los cuales se impetra la nulidad de la Resolución 763 del 10.08.90), ya tuvieron tratamiento en el punto 3 del mismo, al que corresponde reenviar.

3 - Que los hechos que generaron los cargos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5 acaecieron estando el prevenido a cargo de la Sindicatura de la entidad, rol que debía haber cumplimentado en forma eficiente, pues el deber de control y fiscalización inherente a esa función le apareja responsabilidad por su ocurrencia, dado que debía vigilar que la actividad de la ex compañía financiera se desarrollara dentro de la normativa que la rige, incluso controlando la legalidad de las decisiones adoptadas por el órgano de gestión.

Es de resaltar que también en la órbita de la función específica de la fiscalización privada -cuerpo societario que el inculcado integraba- existen exclusivas obligaciones propias, cuales son las de vigilar y controlar que los actos del órgano de administración encuadren dentro de la normativa vigente y utilizar los mecanismos legales a su alcance, en caso de resultar necesario; en la especie, para hacer cesar las conductas indebidas.

No advirtiéndose que hubiese accionado para evitar las irregularidades o revertirlas en cumplimiento de las normas específicas, la actitud adoptada torna procedente atribuirle responsabilidad.

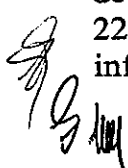
4 - **Pruebas:** Dada la adhesión a la probanzas ofrecidas por los inculcados analizados en el Considerando VI, cabe remitir en homenaje a la brevedad al acápite de prueba (punto 7).

5 - Que, en consecuencia, procede endilgar responsabilidad al encartado **José Héctor FERNANDEZ** por los cargos 2 -facetas 2 y 3-, 3, 4 y 5, cabiéndole absolución por los cargos 1 y 2 -faceta 1- en razón de la desestimación formulada en los puntos 1 y 2 (primer párrafo) del Considerando II.

XI - CONCLUSIONES.

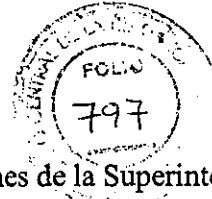
1 - Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a las personas físicas halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21.526, graduando las penalidades en función de las características de las infracciones y ponderando las circunstancias y formas de su participación en los ilícitos.

En cuanto a la sanción que establece el inciso 3º del mencionado artículo 41, para su graduación se tiene en cuenta el último tope máximo de \$ 929.310,28.- (pesos novecientos veintinueve mil trescientos diez con veintiocho centavos) establecido en la Comunicación "B" 4428 del 08.11.90 (B.O. del 12.12.90), haciendo aplicación del artículo 41 de la Ley 21.526 en la redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 24.144 (B.O. del 22.10.92); ello así por ser dicha normativa la que resulta aplicable a la época de los hechos infraccionales.



B.C.R.A.

10567



-27-

2 - Que la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias ha tomado la intervención que le compete.

3 - Que esta Instancia se encuentra facultada para la emisión del presente acto, en virtud de lo normado por el artículo 47, inciso f) de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

RESUELVE:

1º) Tener presente lo establecido mediante la Resolución N° 347 del 16.8.95 (fs. 705/7) de esta Instancia respecto a la exoneración de responsabilidad de Agentra Compañía Financiera S.A.

2º) Desestimar el planteo de nulidad impetrado por los señores SAENZ y GONZALEZ -el que mereció la adhesión de los señores PUNTE, ROMERO y FERNANDEZ- y LOSICER, por las razones expuestas en los Considerandos VI, punto 3, y VIII, punto 3, respectivamente.

3º) Rechazar la prueba testimonial ofrecida a fs. 412, puntos 5 y c), por las causas expuestas en el Considerando VI, punto 7; la pericial contable peticionada a fs. 477 vta. punto 2, debido a las consideraciones expuestas en el punto 4 del Considerando VII; y la testimonial solicitada a fs. 523 punto c) e informativa pedida a fs. 523 vta. punto 3.2, en virtud de los fundamentos expuestos a fs. 534, punto c), y a fs. 695, punto d), los que se tienen por reproducidos en el Considerando VIII, punto 6.

4º) Imponer las siguientes sanciones en los términos del inciso 3) del artículo 41 de la Ley N° 21.526:

- Al señor **Mario Enrique SAENZ**: multa de \$ 183.000 (pesos ciento ochenta y tres mil).
- A cada uno de los señores **Alejandro GONZALEZ** y **José Héctor FERNANDEZ**: multa de \$ 69.000 (pesos sesenta y nueve mil).
- A cada uno de los señores **Jorge Alberto LOSICER** y **Roberto Manuel ROMERO**: multa de \$ 60.000 (pesos sesenta mil).
- Al señor **Norberto LOPEZ ISNARDI**: multa de \$ 9.200 (pesos nueve mil doscientos).
- Al señor **Roberto Antonio PUNTE**: multa de \$ 5.300 (pesos cinco mil trescientos).

5º) Declarar extinguida la acción, por fallecimiento, respecto del señor **Angel José PINI**.

6º) El importe de las multas mencionadas en el punto anterior deberá ser depositado en este Banco Central en "Cuentas Transitorias Pasivas - Multas - Ley de Entidades Financieras - Artículo 41", dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley 21.526.

B.C.R.A.

798


7º) Notifíquese con los recaudos que establece la Comunicación "A" 4006 del 26.8.03 (B.O. 3.9.03), Circular RUNOR 1-645, Sección 3, en cuanto al régimen de facilidades de pago oportunamente aprobado por el Directorio, por el cual podrán optar -en su caso- los sujetos sancionados con la penalidad prevista por el inc. 3º del artículo 41 de la Ley N° 21.526.

JORGE J. LÓPEZ
SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

~~TOMAR~~ NOTA PARA DAR CUENTA AL DIRECTORIO

~~Secretaría del Directorio~~

29 JUL 2005


~~NIEVES A. RODRIGUEZ~~
~~1^a SECRETARIO DEL DIRECTORIO AC~~